

# PSOE 37

congreso federal

04, 05 y 06 | 07 | 08

## cambios globales y retos del siglo XXI



La fuerza del  
***cambio***

## CAMBIOS GLOBALES Y RETOS DEL SIGLO XXI

### **EL GRAN RETO DEL SIGLO XXI: LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. UNA AMENAZA A LA QUE NOS ENFRENTAMOS LOS SOCIALISTAS**

#### **ALCANCE DEL CAMBIO. RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO**

Si se atiende a las grandes líneas de desarrollo científico, prevención y control de enfermedades y prolongación de la vida, expansión de la libertad y los derechos, o fomento y provisión de bienestar y conquistas sociales, la historia de la humanidad en los dos últimos siglos muestra, en términos generales y como resultado final, un progreso continuado.

Pero la constatación de esta realidad cuenta con limitaciones muy importantes. Por una parte, la principal, es que ese progreso se ha repartido de forma muy desigual, y no ha llegado hasta ahora más que a una parte, significativa, pero minoritaria, de la población mundial. Por otra, la estratégica, es que ese avance ha deteriorado el planeta y consumido extraordinariamente sus recursos energéticos.

El hambre, las enfermedades, la pobreza, el analfabetismo y la ignorancia, el desamparo, la opresión y la exclusión, marcan la vida de miles de millones de seres humanos. Las guerras, la violación de derechos fundamentales, la inexistencia de libertades básicas, son moneda común en zonas enteras del planeta. Los fundamentalismos violentos, los intereses egoístas, los poderes oligárquicos, alimentan la inseguridad y ahogan en muchas partes la mera expresión de la libertad, la igualdad y la autonomía personal.

Esos son algunos de los grandes retos sociales a los que tenemos que hacer frente. Los retos de alcanzar los objetivos del Milenio marcados por Naciones Unidas, los de reducir los desequilibrios entre el norte y el sur, las injustas y abismales diferencias entre condiciones de vida, los de extender nacionalmente y promover internacionalmente la igualdad de derechos y las oportunidades de progreso, las conquistas sociales y los espacios de democracia y libertad.

Tenemos que hacerlo porque así lo exige la fidelidad a nuestros valores. Tenemos que afrontarlo también porque sólo desde la perspectiva de un mundo más justo y equilibrado, equitativo, organizado sobre la cooperación, en el que progrese el bienestar colectivo, podrá obtenerse seguridad y estabilidad, y será globalmente sostenible nuestro propio bienestar y el de generaciones futuras.

Si eso es necesario en el ámbito social, es absolutamente obligado, radicalmente imprescindible, en lo que concierne al gran desafío de nuestro tiempo, a la amenaza creciente del cambio climático. Una amenaza extrema que es ya una realidad incontestable. Una amenaza que está alterando la naturaleza, pero cuyos efectos perniciosos se extienden transversalmente sobre todos los órdenes de la vida social, llegando a afectar la salud y la calidad de vida.

Una amenaza que esta alarmante realidad proyecta sobre nuestro futuro, y que compromete el hecho mismo de que tengamos futuro. Una amenaza, pero también una oportunidad de empezar a sentar las bases para dar un giro hacia un modelo de crecimiento y organización individual y colectiva que sea más respetuoso con el entorno y, por tanto, más sostenible.

El modelo productivo adoptado en los dos últimos siglos y medio produce ahora, cada vez más, todo tipo de efectos perversos, deteriorando las condiciones que hacen posible la vida. Su continuidad no es que ya no sea deseable, es que resulta por completo inviable. Por tanto, ha llegado el momento de cambiar los paradigmas de los que nos hemos servido tanto tiempo.

El cambio climático es ya una realidad. El calentamiento se está acelerando. La acumulación de evidencias aportadas por la comunidad científica es abrumadora e incontestable. Nuestro modelo de desarrollo basado sobre todo en el consumo progresivo de combustibles fósiles, la generación de gases provenientes de procesos industriales y destrucción de grandes zonas naturales con la devastadora e indiscriminada tala de árboles en muchos lugares del planeta y la transformación de usos del suelo, han incrementado extraordinariamente la concentración de gases de efecto invernadero, CO<sub>2</sub>,

vapor de agua, óxido nítrico o metano, acumulando en poco más de un siglo una tercera parte más de emisiones que en toda la historia de la humanidad.

Once de los doce últimos años han sido los más calurosos desde que existen registros fiables de temperaturas, hace ya siglo y medio. Contamos con décadas de aumento de las temperaturas medias globales del aire, de derretimiento disperso y de la reducción de la superficie total de hielo en el planeta, de retracción de los glaciares y de pérdida de grosor del casquete boreal. Se constata desde hace medio siglo la continua subida del nivel medio de los mares y el riesgo de alterar las corrientes oceánicas.

Como atestigua nuestra propia experiencia, los fenómenos meteorológicos muestran un comportamiento cada vez más irregular y extremo dando origen a continuos desastres naturales de pronunciados y trágicos efectos sociales. Desastres que traen consigo muerte, hambre, epidemias, pobreza y desesperación a extensas poblaciones del mundo, y que, unidos a factores políticos y de subdesarrollo histórico, están en el origen de los intensos movimientos migratorios que se manifiestan en las últimas dos décadas, especialmente desde el continente africano.

El cambio climático es, pues, un hecho incuestionable. Un hecho corroborado por el mundo científico, producto sustancialmente de la acción humana, de los cambios globales producto de la sobrepoblación y de las formas de producción y hábitos de consumo. Así lo ha definido Naciones Unidas, ya en 1992, "el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial".

Así lo ha vuelto a constatar el año pasado en Valencia el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, grupo creado por Naciones Unidas hace veinte años. Así se ha reafirmado en la Cumbre de la Conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Bali en diciembre del pasado año.

En el primer caso se ha vuelto a subrayar no sólo el carácter inequívoco del calentamiento de los elementos del sistema climático, sino el hecho mismo de que, debido a la acumulación de las emisiones del pasado, las actuales y las futuras, los impactos resultantes de dicho calentamiento son ya inevitables, y durarán un periodo de tiempo

muy largo, quizás siglos, debido a las escalas temporales asociadas a los procesos climáticos. En consecuencia, son necesarias medidas de corrección y adaptación para poder asumirlos. Medidas consensuadas a nivel nacional e internacional que, a la hora de asignar derechos y obligaciones, tengan en cuenta la necesidad de equilibrar con justicia los niveles de desarrollo internos en los países y entre las distintas partes del mundo, y que exijan los mayores esfuerzos a quienes previamente se han beneficiado de ese modelo que ahora hay que superar.

Es más, de continuar las emisiones de gases de efecto invernadero a los mismos niveles actuales, es decir, aún frenando por completo la espiral de su crecimiento, se producirá muy probablemente un calentamiento adicional y aún más vertiginoso que provocará muchos otros cambios en el clima global durante las próximas décadas. Cambios de mucha mayor magnitud y efectos más profundos que los que estamos viviendo y hemos vivido en las décadas precedentes.

En el segundo caso, es decir en la Cumbre de Bali, ha habido un consenso general sobre la necesidad de llegar a compromisos internacionales que no solamente prosigan, sino que intensifiquen la senda de acción iniciada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se aprobó la Convención Marco sobre el Cambio Climático, origen de la subsiguiente Cumbre de Kioto, en 1997.

El Protocolo aprobado entonces, destinado a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un horizonte temporal de caducidad en 2012, por lo que es ya urgente acordar nuevos objetivos, que necesariamente habrán de ser más ambiciosos.

Sin embargo, no basta la definición de objetivos y la expresión de compromisos si luego no los cumplimos. Como muestra nuestra experiencia reciente, el rechazo o resistencia a asumirlos, o el incumplimiento de los mismos por parte de los grandes emisores, puede convertir en inútiles los comportamientos responsables de muchos otros países, y sarcásticas las exigencias de que asuman sacrificios mayores precisamente los países que luchan por salir del subdesarrollo o las regiones que tratan de homologarse a las medias de su propio país. Exigencias que resultan desalentadas por el ejemplo egoísta de quienes ya se han desarrollado con anterioridad por medio de un uso exhaustivo y desmedido de los recursos que ahora condenan para los demás.

Pero hay que reconocer que, aunque no todos están dispuestos a afrontar la amenaza con igual seriedad, hay que poner de manifiesto algunos movimientos recientes que, con sus contradicciones, resultan más prometedores y esperanzadores que los del pasado.

Así, la administración republicana de los Estados Unidos, despectiva muchas veces con Kioto, reticente e insolidaria siempre, preocupada más por la reducción de costes y la maximización de beneficios que por la amenaza climática, convocó hace pocos meses una reunión internacional con los países más emisores, evidenciando al menos una mayor preocupación que se va abriendo paso en el país más emisor de todos. Por su parte, el gobierno chino, país ya decisivo para el control de las emisiones actuales, pero absolutamente determinante para las futuras, ha presentado recientemente un Programa de Cambio Climático. Así pues, los países más reticentes a Kioto, a los que es fundamental incorporar a su Protocolo y a las acciones posteriores a 2012, han acabado tomando medidas y emprendiendo iniciativas que, siendo claramente insuficientes, permiten trabajar por una acción conjunta internacional más decisiva. Porque sólo habrá respuesta eficaz con una respuesta global concertada.

Construir un modelo alternativo y consensuado al del crecimiento económico basado en el carbono como principal fuente de energía costará tiempo y esfuerzos, y no será un camino sin dificultades, alteraciones y retrocesos. Pero es el único camino que tiene futuro. Es urgente emprenderlo cuanto antes y es imprescindible avanzar con velocidad y firmeza, empezando por frenar y revertir la dinámica actual. Sólo tiene futuro un modelo que parta de la conciencia de que contamos con recursos limitados, que necesitamos hacer más eficiente nuestro consumo y más intenso nuestro ahorro, que aprovecha la tecnología para proveerse de fuentes limpias y renovables de energía. Con los socialistas, España está en condiciones de ser parte del liderazgo hacia ese nuevo modelo.

Con nuestro compromiso ético socialista, no podemos confiar en que el deterioro se pueda detener sin nuestra acción, ni podemos ser inconscientes o engañarnos a nosotros mismos, insensibilizándonos frente al problema, siendo egoístas insolidarios con las generaciones futuras. Debemos convertirnos en aliados e impulsores de la transformación exigida por un nuevo modelo. Tenemos que alimentar y aprovechar la creciente conciencia y movilización mundiales ante esta amenaza.

Si nos aliamos comprometidamente con la transformación que exige la respuesta al cambio climático, tenemos la obligación, pero también la oportunidad, de modificar algunos elementos hasta ahora esenciales de nuestro modelo productivo que han mostrado ya los límites de su continuidad, y que son a la larga incompatibles con la sostenibilidad. Luchar contra el cambio climático requiere liderazgo político, determinación, compromiso, perseverancia, esfuerzos, recursos y solidaridad; acción pública, implicación empresarial, educación, concienciación individual, movilización y participación ciudadana.

Sin embargo, no hacerlo, además de no ser una hipótesis viable a medio plazo, comporta esfuerzos y costes aún muy superiores. Nacionales y mundiales. Costes que podrían llegar a suponer una pérdida entre 5 y 20 veces superior en términos de PIB mundial a lo que exigiría actuar decididamente con acciones tempranas. Así lo certifican la Comisión Europea, el Informe Stern para el Reino Unido, los informes referidos del Panel de Naciones Unidas y la práctica unanimidad de los expertos.

Somos plenamente conscientes de que, más allá de las reacciones nacionales, la respuesta ha de ser necesariamente global, como lo es la propia amenaza.

Nosotros, los socialistas, trabajamos por esos objetivos en el seno de Naciones Unidas. Creemos en su capacidad de acción, en la de todas y cada una de sus agencias y programas para avanzar en ese objetivo y apoyaremos decididamente que refuercen su papel.

Estamos a favor de impulsar las estrategias regionales de lucha contra el cambio climático, y de situarlos en la primera línea en la Unión Europea. Nos comprometimos en Bali a apoyar que la Unión Europea mantenga y profundice su liderazgo responsable en esta cuestión; que defienda como objetivo que la temperatura media global no aumente en más de 2°C; que reduzca de forma autónoma para 2020, como así ha decidido, sus emisiones de dióxido de carbono en un 20% respecto de 1990; y que se convierta en modelo y se muestre dispuesta a ir aún más lejos en esa reducción de emisiones y de aumento de la temperatura media global si así se comprometen también otros países industrializados.

También trabajamos intensamente cooperando al desarrollo, ayudando a los países pobres, que, una vez más, sufrirán más que nadie las consecuencias del deterioro medioambiental. Defendemos que, para posibilitar un acuerdo post-Kioto efectivo y justo, se fortalezca la financiación internacional y las ayudas para que los países pobres y en vías de desarrollo puedan acceder a tecnologías más limpias, sin el coste de sustitución de las actuales que para la mayoría de ellos sería inasumible, y crear un entorno productivo sostenible, así como mitigar los efectos del cambio climático en su territorio. También apoyamos que se les preste la asistencia técnica necesaria para prevenir efectos de catástrofes naturales, como por ejemplo sistemas de alertas tempranas. Asimismo nos empeñamos en aportar capacidad de respuesta internacional ante crisis humanitarias, desastres ecológicos, climáticos, migraciones o el acceso a recursos imprescindibles como agua potable y alimentos básicos.

Estamos apoyando ya acciones de ese tipo. Hemos contribuido a crear la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, con el objeto de identificar cuales son las prioridades, crear conciencia ciudadana y construir consensos para abordarlas. Dentro de dicha Red se encuadra el Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio Climático y la cooperación con la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía.

La prevención y la promoción de la salud es una prioridad para nosotros. Por ello consideramos especialmente relevante el campo de acción dirigido a prevenir y paliar los múltiples impactos del cambio climático sobre la salud. Dichos impactos aumentarán si no se toman acciones preventivas de inmediato. Aunque nadie resulte exento, sus efectos serán más dañinos para las poblaciones más vulnerables y los países más pobres y menos desarrollados.

Por ello, es necesario profundizar en estrategias conjuntas de la Organización Mundial de la Salud con los distintos países, que conformen una estrecha alianza operativa de los sectores de salud y medio ambiente, para asegurar el mínimo impacto posible sobre el bienestar de la población.

En nuestro ámbito nacional, el informe "El cambio climático en España. Estado de situación 2007", elaborado por el panel de expertos españoles hace apenas unos meses, identifica para España patrones de comportamiento similares a los del resto de países industrializados, en el que la quema de combustibles fósiles representa el 80% de la producción y consumo de energía.

Además, pone el acento en algunos aspectos que muestran una mayor vulnerabilidad específica, relativos al riesgo de disminución de nuestros ya escasos recursos hídricos, y de una mayor dificultad de planificación, al verse sometidos previsiblemente a patrones de precipitación más torrenciales; el daño potencialmente muy elevado a nuestro modelo agrícola y a nuestra rica pero vulnerable y precaria biodiversidad; con múltiples especies sensibles o en peligro de extinción; o la amenaza real de desertización creciente.

Pero también señala que muchos de los impactos pueden evitarse para el futuro, en tanto que otros, ya irreversibles, pueden reducirse o retrasarse en sus efectos por la mitigación. España es el decimosexto país productor de emisiones, emitimos 15 veces menos que los Estados Unidos o China, y representamos el 1% de la emisión mundial. Por ello nuestra acción reductora ha de ser cuantitativa, cualitativa y ejemplarizante a nivel global. Para ello tenemos que avanzar de manera más decidida, con medidas efectivas a plazo corto y medio, en los campos del suministro y ahorro energético, transporte, viviendas, industria, agricultura, silvicultura, bosques, erosión del suelo, recuperación de masa forestal, control de vertidos y residuos orgánicos e inorgánicos, y minimización de los mismos, gestión del reciclaje con recogida selectiva de basuras y sustitución de bolsas de plástico por reutilizables.

En los últimos cuatro años hemos tomado el camino adecuado para avanzar en esa dirección. Aunque habíamos ratificado en su día el Protocolo de Kioto, el gobierno de entonces nunca se tomó en serio el cumplimiento de los compromisos voluntariamente adquiridos en la negociación, que, medidos en términos relativos, eran comparativamente muy exigentes para España.

A nuestra llegada al Gobierno estábamos más lejos del objetivo que al ratificar el Protocolo. No se había aprobado el Plan Nacional de Asignaciones, y carecía de

calendario preciso y de dotación presupuestaria efectiva la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética.

Hemos progresado, aprobando en 2004 el Primer Plan de Asignaciones; en 2005, el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética; y, en ese mismo año, el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, PEIT, que opta preferentemente por el transporte ferroviario, tanto para personas como para mercancías, el modo que genera menos emisiones de gases y mejor articula la comunicación entre poblaciones; y, también en 2005, un nuevo Plan de Energías Renovables, cuyo desarrollo contribuirá no sólo a la provisión energética sino al cumplimiento de nuestros compromisos emisores; en 2006, el Código Técnico de la Edificación.

Con todo ello, conseguimos en 2006 algo no conseguido antes, desacoplar el incremento de las emisiones del crecimiento de la economía, reduciendo por primera vez aquellas en 4 puntos, con una economía que crecía cerca del 4%. Aunque 2007 no ofreció tan buenos resultados, estamos en la tendencia reductora que hay que mantener, para lo que se exige mayor esfuerzo colectivo, intensidad y diversificación en las políticas sectoriales, alcanzando tanto a los grandes emisores como a las emisiones difusas.

Tenemos un horizonte marcado por delante. Un horizonte que guiará toda esta Legislatura. En 2007 convertimos al Cambio Climático y la Energía en una acción estratégica prioritaria del Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011. Iniciamos la construcción y operación de una plataforma experimental de tecnologías de oxidación y captura y almacenamiento de CO<sub>2</sub>. Para el periodo 2008-2012, tenemos en vigor el segundo Plan Nacional de Asignaciones, y el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. Hemos regulado normativamente la participación de España en los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto, las Instalaciones Térmicas de Edificios y la Energía Eólica Marina. Pondremos en marcha, en cooperación con Portugal, el Centro de Investigación de Energías Alternativas.

Con la aprobación de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, y de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, hemos establecido el marco de actuación de todas las Administraciones y de los agentes privados. Un marco integral y complejo con el objetivo de compaginar el cumplimiento de nuestro compromiso al ratificar el

Protocolo de Kioto y los acuerdos de Bali, con la mejora de la competitividad de nuestra economía, la creación intensa de empleo de calidad, la garantía del abastecimiento energético necesario, el mantenimiento de la estabilidad económica y presupuestaria y un desarrollo sostenible y eficiente.

En el Programa con el que hemos concurrido a las elecciones generales de 2008 hemos incorporado un buen número de propuestas razonadas y realizables que, al recibir el apoyo mayoritario de los españoles, se convierten en compromisos reafirmados y reflejados en el programa de gobierno presentado en la Investidura.

Tales compromisos incluyen incentivos a las empresas que, con parámetros de responsabilidad social corporativa, hagan público su compromiso de reducción de emisiones y presenten anualmente los resultados que obtienen; incentivos a la movilidad sostenible y al transporte público; apoyos para la aplicación de los requisitos establecidos por el Código Técnico de Edificación; rehabilitación energética integral de viviendas ya construidas; medidas generales de eficiencia energética; potenciación de la I+D+i en energías renovables limpias, donde nuestras empresas parten ya de una posición mundial de liderazgo en provisión, organización y distribución, y en la investigación para asegurar el suministro continuado partiendo de unas energías intermitentes; fomento de la fiscalidad verde; investigación en captura y almacenamiento de CO<sub>2</sub>; promoción de la utilización de biocarburantes procedentes de residuos agrícolas y forestales, así como de otras materias primas no alimentarias; y fomento de las plantas de biometanización; construcción de plantas de reciclaje, fomento de la silvicultura y reforestación intensa y responsable, con la plantación de decenas de millones de árboles; mejoras de la gestión de espacios naturales, con su apadrinamiento por instituciones, grupos sociales, alumnos y alumnas, restauración de ecosistemas y de hábitats para la fauna. La consecución de estos compromisos, que implica la puesta en marcha de muchas políticas e instrumentos de actuación, requiere necesariamente una seria implicación y coordinación entre administraciones, participación de los agentes económicos y sociales, educación e información.

La estructura del gobierno formado tras las elecciones, con el nuevo Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, refleja la prioridad concedida a la lucha contra el cambio climático que, como es obvio, trasciende en mucho el periodo político que

acabamos de iniciar, y a la protección y gestión sostenible y racional de nuestros recursos. Alentamos que desarrolle una política de políticas, una política de la transversalidad de las acciones. Pondremos además todo nuestro esfuerzo e interés en que, si el largo camino de las negociaciones para la firma de un acuerdo post-Kioto no concluye antes, pueda hacerlo durante la presidencia española de la Unión Europea en 2010.

El esfuerzo continuado que tenemos por delante requiere la acción conjunta y el compromiso efectivo de todas las administraciones y de la sociedad. Para propiciarlo, la celebración de una Conferencia de Presidentes impulsará la coordinación y efectividad de los planes propios de las Comunidades Autónomas y del Gobierno de España. Asimismo, a nivel local, se precisa la intensificación de las Agendas 21 y la potenciación de la Red de Ciudades por el Clima , Red Biodiversidad y Red de Ciudades Saludables, con financiación suficiente, para lo cual debe construirse un partenariado entre Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y entidades financieras para acometer, entre otras acciones, la transformación total hacia el ahorro energético y el uso de tecnologías más limpias del alumbrado público, de los edificios públicos, en particular centros educativos y deportivos, así como la elaboración y aplicación de programas de concienciación social.

Pero este gran reto y esta gran batalla requieren la implicación al completo del conjunto de la sociedad, sostenida durante un largo periodo de tiempo. Se requiere extender los valores en los que se funda la acción necesaria, diseminar la información disponible, educar a la sociedad, en particular a los niños y niñas y a los jóvenes, activar la conciencia de los ciudadanos y convertir el modo de vida de cada uno de ellos, el hogar de cada familia, los espacios compartidos, en auténticos motores del cambio necesario.

España puede, debe y tiene que estar en primera línea en la lucha contra el cambio climático. Somos uno de los países más expuestos a sus efectos. Los socialistas, aliados con nuestra sociedad, haremos que alcance esa posición de vanguardia.

El Partido Socialista quiere ser más respetuoso con el medio ambiente. La Comisión Ejecutiva Federal promoverá actuaciones de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética en todas las sedes y agrupaciones del PSOE.

Asimismo, y en consonancia con la necesaria modernización de las Agrupaciones, iremos sustituyendo las comunicaciones en papel por comunicaciones electrónicas a los militantes que dispongan de correo electrónico.

El Partido Socialista irá paulatinamente sustituyendo el papel de sus publicaciones y comunicaciones, tanto internas como externas, hasta lograr que el 100% del utilizado sea de origen reciclado.

### **EL NECESARIO CAMBIO EN EL MODELO ENERGÉTICO**

Con las grandes transformaciones que experimenta nuestro mundo actual afloran fenómenos, como el cambio climático, que permanecían ocultos hasta hace bien poco, y que ahora nos anuncian cambios estructurales a los que ya estamos abocados, y cuyo manejo, apropiado o no, acabará determinando nuestro propio futuro.

Los países más desarrollados han adquirido conciencia desde principios de los años 70 del pasado siglo del valor estratégico de la energía, y en particular del petróleo, para la continuidad y expansión del modelo de crecimiento económico en el que se han venido fundamentando las prestaciones del bienestar. Hemos desarrollado una civilización profundamente dependiente, para su bienestar, de los combustibles fósiles, singularmente del petróleo. Y el agotamiento de esta fuente de energía nos obligará a un nuevo modelo de sociedad con el que garantizaremos, no sólo el bienestar obtenido hasta ahora, sino también el derecho a un aire limpio y a la seguridad ambiental que no nos proporciona el actual modelo de crecimiento.

En las últimas décadas, el itinerario de ese crecimiento ha estado habitualmente marcado por las fluctuaciones del precio de los hidrocarburos. En ese escenario, los países referidos, a los que se han ido añadiendo las potentes y muy consumidoras economías emergentes, han sido capaces de elaborar estrategias de eficiencia y diversificación que hasta hace bien poco han permitido mantener el reto de la provisión energética en límites controlables.

Pero el incremento continuo de los precios, singularmente exacerbado en los últimos años, el explosivo aumento de la demanda energética mundial -originado por la sociedad de consumo que crece más 200 millones de habitantes al año en el mundo-, el cercano horizonte de agotamiento que muestran las reservas de hidrocarburos, el cada vez más visible deterioro medioambiental que su uso provoca, unido a la mayor capacidad, política y técnica, de los países productores para decidir sobre la dimensión y las condiciones de su aportación al mercado, proyectan la evidencia de que la mera continuidad del modelo industrial basado en la energía del carbono está tocando a su fin.

Ese inevitable final marcará, ya está marcando, el sentido de las decisiones a tomar en las próximas décadas

Dado que, ese final llegará más pronto que tarde, tenemos que estar preparados para tomar exitosamente el camino alternativo. De ello depende nuestra capacidad para competir e innovar, y, más allá, nuestro éxito como sociedad y el bienestar de nuestros ciudadanos en un entorno medioambiental sostenible. Así, la próxima década deberíamos considerarla como una oportunidad para llevar a cabo un profundo cambio tecnológico que tienda a la reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>.

Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, así como de otras instituciones especializadas, contemplan dos escenarios diferentes, pero casi igualmente comprometidos y preocupantes.

En el primero de ellos, el incremento de la demanda de energía de aquí a 2030 alcanzaría un 55% sobre los datos de 2005, y los países en desarrollo contribuirían con tres cuartas partes de ese incremento, suponiendo China e India casi la mitad, a pesar de que sus emisiones per cápita se sitúan por debajo de las de Estados Unidos o de los países de la OCDE. Los combustibles fósiles continuarían dominando la cesta energética.

De seguir esa tendencia, se incrementarían las emisiones de dióxido de carbono, así como la dependencia de los países consumidores. Y si a ello añadimos las dificultades para satisfacer la demanda mundial, también se incrementarían las tensiones en el mercado.

En el escenario alternativo, en el que se contemplan políticas dirigidas a reducir la demanda de energía, el crecimiento de la misma hasta 2030 sería menor. Se estabilizarían las emisiones de gases en torno a 2020, en el mejor de los casos, y empezarían a reducirse en torno a 2030, pero seguirían siendo una cuarta parte más altas que en 2005.

Para conseguir llegar a ese escenario, menos comprometido, sería necesaria una firme y urgente acción de todos los países, avances tecnológicos importantes, y la asunción de costes sustanciales. Aún así, arriesgaríamos un aumento de la temperatura media del planeta de alrededor de 3°C sobre los niveles preindustriales, algo que no podemos soportar sin arriesgar nuestro propio futuro. De aceptar esta hipótesis, el tiempo del que disponemos para la necesaria transición hacia las energías renovables se vería seriamente recortado, exigiendo por tanto una mayor urgencia en la respuesta.

Por tanto, se necesita dar un giro intenso que afecte más al propio modelo de provisión energética, y no solo a la dimensión de los parámetros del modelo actual, que difícilmente hace compatibles el crecimiento de las economías avanzadas con el desarrollo de las economías emergentes. Es necesaria también una mayor determinación en la búsqueda y exploración de nuevas fuentes de energía, así como en la introducción de cambios sustanciales en el modelo económico de producción, al estar basado en el consumo de combustibles fósiles.

Del mismo modo, deberíamos introducir mejores hábitos industriales, empresariales y domésticos que provoquen una reducción de la demanda y aporten seguridad ambiental.

Con toda probabilidad, tal y como aparece en todos los informes científicos, no habrá una sustitución absoluta del modelo actual por otro alternativo completamente distinto. La provisión de energía en el futuro tendrá aportaciones de fuentes distintas que formarán parte de la cesta total, entre las que estarán las asociadas al carbono, aunque se hallen aliviadas en sus efectos perniciosos por las conquistas tecnológicas.

La apuesta fundamental de los socialistas, en el camino hacia el nuevo modelo de crecimiento energéticamente sostenible, se centra en el desarrollo de las energías limpias y renovables. Tenemos las condiciones naturales necesarias, disponemos de la

tecnología más avanzada y contamos con empresas líderes en el desarrollo de las mismas. Esa es, para nosotros, una gran oportunidad para ocupar un lugar avanzado en el mundo. Pero sólo si asumimos desde el principio que esa es nuestra opción y que, estratégicamente, sólo esa opción tiene un futuro seguro, estaremos dispuestos a hacer el esfuerzo que ello comporta. Un esfuerzo para el que ya estamos preparados. Y sólo si desarrollamos con intensidad este esfuerzo podremos ir prescindiendo paulatinamente del uso de otras fuentes. A partir de esta apuesta inequívoca que irá marcando una presencia cada vez más intensa de esas energías en la composición total de nuestro consumo, en el periodo de transición necesario tendremos que asegurar las exigencias que nos plantea la continuidad de nuestro crecimiento con un uso energético cada vez más eficiente y austero, y con la provisión de las distintas fuentes de energía. En ese contexto, sin que preveamos la promoción de nuevos parques nucleares, respetaremos la vida útil de las actuales centrales, con el compromiso paralelo de extremar con todo rigor la garantía de seguridad desde la acción de gobierno y del organismo regulador correspondiente, así como su permanente actualización tecnológica.

Aunque hoy las energías alternativas todavía suponen una parte limitada del mix energético, lo cierto es que esa parte va creciendo, la tecnología utilizada para obtenerla se va perfeccionando y mejorando su rendimiento, y los precios a los que se obtienen son cada vez más competitivos, pero especialmente si tenemos en cuenta la sostenida deriva alcista del petróleo.

Pero su generalización plantea todavía problemas de almacenamiento, transporte y subsanación de las intermitencias producidas por los comportamientos de la naturaleza. Para superarlos se ha propuesto, y ya se viene experimentando, acudir al hidrógeno como medio de almacenamiento, garantía de estabilidad de suministro y facilidad para el transporte. Y es en esta línea, donde debemos promover proyectos piloto multidisciplinares que nos acerquen a la economía del hidrógeno, contando con la colaboración de las Universidades en todo el ámbito de la Unión Europea.

Con esa tecnología de producción y almacenamiento, y aprovechando la revolución aportada por las tecnologías de la comunicación, sería posible a empresas, viviendas, y particulares convertirse a la vez en generadores y consumidores, generar por sí mismos energía renovable e intercambiarla entre sí en un mercado bidireccional, estableciéndose

una interconectividad que balanceara los usos y flujos energéticos. Pues lo importante es acertar con el modelo de transición energética contando con el apoyo de los ciudadanos y las empresas para minimizar las dificultades que conlleva la consecución de estos objetivos.

España es uno de los países en muy buena situación de partida para asumir cambios como el referido. Somos una potencia real en el campo de las energías renovables. Tenemos empresas potentes, establecidas en diversas partes del mundo, y tecnología disponible de primer nivel. Sin embargo, debemos progresar mucho más en fuentes como la solar térmica, mareomotriz, eólica marina, geotérmica, fotovoltaica y biomasa. Pues España se encuentra en una situación claramente favorable al desarrollo de estas tecnologías en su propio territorio, especialmente en las de aprovechamiento de la energía solar y eólica. Podemos, por lo tanto, ser primeros actores entre quienes lideren lo que bien puede considerarse una tercera revolución industrial.

Al mismo tiempo hay que fomentar con incentivos la construcción de plantas de biometanización. Pues el reciclaje de la materia orgánica que se encuentra en la basura puede utilizarse para la agricultura así como para producir gas y electricidad. Del mismo modo debemos apostar por las políticas de I+D+i que alcancen tanto a la generación como al consumo de energía. Entre ellas, especialmente seguir avanzando en el reciclaje de la materia orgánica procedente de los residuos que puede utilizarse para la lucha contra la erosión, la restitución de suelos, las labores agrarias, así como la producción de energía.

Estas políticas deben también constituir una oportunidad para la innovación de los sectores tradicionales sometidos a cambios a causa de las adaptaciones requeridas para la reducción de emisiones.

En todo caso, no podemos perder de vista cuáles son las claves finales de respuesta a nuestras necesidades energéticas: suficiencia en la provisión, diversidad de fuentes, seguridad en la generación y en el transporte, garantía de conexión.

En este sentido, capitalizando la especial consideración de nuestro país como zona mundial apta para el desarrollo de las energías limpias, debemos elaborar un Plan Integral

para España que establezca los límites y condiciones de ubicación para las instalaciones de tales energías.

Muchas de las claves antes referidas remiten no sólo a una cuestión de modelo económico o de tecnología, sino que se insertan en cuestiones de orden geopolítico y geoestratégico, que no pueden ser resueltas más que por medio de relaciones económicas internacionales justas, ordenamientos supranacionales, legitimidad multilateral y cooperación.

### **RESPUESTAS A LA CRISIS ALIMENTARIA**

Estamos asistiendo en los últimos meses al incremento exponencial del precio de los alimentos básicos. Productos tan básicos para centenares, si no miles de millones de seres humanos, como es el arroz, casi han doblado su precio en apenas el primer trimestre de 2.008. Otros productos y materias primas esenciales para esa misma cantidad de población han seguido camino parecido.

Puede que ese giro espectacular haya sorprendido al mundo mediático, que rápida y lógicamente ha puesto el foco de atención sobre el mismo ante la emergencia de hambrunas y problemas de nutrición en diversas áreas del mundo. Pero nada más lejos de constituir un hecho inesperado. En realidad tenemos los suficientes elementos para concluir que no se trata de un fenómeno pasajero, provocado por factores coyunturales, de condición fluctuante y de previsible pronta solución. Por el contrario, constituye un elemento estructural de nuestra realidad que afecta ya hoy a los cimientos del sistema.

Entre las causas que lo explican figura no sólo el incremento de los precios del combustible sino también el continuo crecimiento de la población, que añade cada año más de un centenar de millones de personas al total mundial. Un crecimiento desmesurado sobre cuyas causas y efectos deberíamos reflexionar.

Asimismo, la emergencia de nuevos competidores por los recursos naturales de todo tipo; los intensos cambios consumistas en general, y alimentarios en particular, provocados por la mayor renta disponible en múltiples países que abandonan el profundo subdesarrollo y

la economía de mera subsistencia, como es paradigmáticamente el caso de China o India, que sumadas, suponen hoy el 40% de la población mundial.

Igualmente, los desastres climatológicos, cada vez más frecuentes y más intensos, corolario de los efectos del cambio climático; las guerras que devastan regiones enteras del planeta, en especial de África. Ambos fenómenos, unidos al estructural de la pobreza, provocan intensos y desesperados movimientos migratorios con efectos perversos sobre la despoblación y la pérdida de capacitación de los países emisores. En este escenario África es una prioridad, porque de los 37 países en crisis con necesidad de asistencia externa, 21 se encuentran en este continente y se ven más cruelmente amenazados por los fenómenos ya analizados.

Cuenta también el abandono de extensas áreas rurales como consecuencia de la intensificación de la urbanización asociada a la búsqueda de la mejora de las oportunidades y condiciones de vida. El abandono de cientos de miles de hectáreas rurales para la intensificación de la urbanización o en procesos de reconversión de producciones agrícolas con la consiguiente desestabilización del campo, ha generado igualmente una escasez de recursos, que podrían ser aprovechables para la producción energética.

Asimismo, influye el previsible efecto del uso alternativo de potenciales alimentos para la producción de biocombustibles, sometido ahora a fuerte discusión por su eventual incidencia en la escasez de tales alimentos y sobre su propio e intenso impacto medioambiental.

El debate está abierto, y reviste una gran complejidad, pues las conclusiones, en ningún caso suficientemente claras, dependen de la generación de biocombustibles de que se trate, de las materias primas utilizadas y de las tecnologías de proceso, teniendo un menor impacto los llamados de tercera y cuarta generación, en los que se utilizan, en el primer caso, técnicas de biología molecular para mejorar la conversión de biomasa o biocombustible, y, en el segundo, la captación y almacenamiento de carbono tanto a nivel de materia prima como de tecnología de proceso.

En cualquier caso, los socialistas apostamos por un uso sostenible de los biocarburantes a fin de no perjudicar la biodiversidad, el paisaje y la socioeconomía de los países y zonas productoras.

La relación entre agricultura, cambio climático y producción de biocombustibles es cada vez más estrecha. De una parte, la agricultura contribuye fuertemente al cambio climático, al condicionar, en muchos casos, los recursos hídricos del sistema. De otra, el cambio climático altera, en general adversamente, aunque varía según las latitudes, la capacidad de producción agrícola.

Reviste singular riesgo el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de agua, resultado de la combinación de sequías y precipitaciones extremas, mayores variaciones estacionales, incremento de la evaporación, etc. De hecho, existe en varias áreas del mundo un alto potencial conflictivo derivado del acceso al agua.

Este acceso al agua está dificultado no sólo por los desequilibrios climáticos, sino también por la deficiencia energética de los países pobres: agua y energía van ligados. Los desequilibrios de gestión hídrica en cuencas internacionales se van a endurecer; para minimizarlos se precisaría una acción conjunta multilateral que ayudase a los accesos energéticos sostenibles. La sostenibilidad se convierte así en una necesidad y un instrumento para la seguridad mundial y la paz.

Finalmente, también han tenido su efecto altamente nocivo los movimientos acaparadores y especulativos, guiados por el descarnado afán de ganancia.

Las consecuencias de todo ello son costosas en los países ricos, pero no llegan por ahora a medirse más que en términos de presión alcista sobre la inflación. Por el contrario, son absolutamente catastróficas sobre áreas enteras de África, Sudeste Asiático y América Latina, desestabilizando la economía de muchos de sus países, provocando escasez y hambre y menor esperanza de vida.

Por esta razón, los socialistas defenderemos ante instancias internacionales nuestra negativa ética y humanitaria al uso de combustibles como el biodiesel o bioetanol, extraídos de alimentos que son hoy necesarios para centenares de millones de personas.

Del mismo modo los socialistas promoveremos políticas dentro de la Unión Europea y en los Organismos correspondientes como la FAO para evitar la especulación con las materias primas alimenticias, como ha sucedido recientemente con los cereales.

Precisamente la ONU habla de la mayor crisis alimentaria de la humanidad en décadas, y la FAO, la agencia mundial de la agricultura y los alimentos, se ha referido a la situación actual como un “tsunami silencioso”, que trae hambrunas y genera revueltas. Los esfuerzos mundiales de lucha contra el hambre son cada vez más insuficientes. El cumplimiento de los Objetivos del Milenio se aleja.

En este escenario de aguda crisis alimentaria, algunos países han mostrado su intención de apoyar con recursos propios acciones de emergencia. Es el caso de Estados Unidos, que además de anunciar una ayuda puntual poco significativa para su capacidad económica, se propone impulsar la cooperación de instituciones financieras internacionales o del G-7. Y es el caso también de España, que apoya programas ambiciosos de ayuda por parte de instituciones financieras internacionales, gobiernos, administraciones y sociedad civil. Recientemente, por ejemplo, en el marco de la reunión del Banco Asiático de Desarrollo, reunido en Madrid el pasado mes de mayo.

Del mismo modo, debemos impulsar el debate sobre la posible modificación de la PAC redefiniéndola para que pueda responder a los retos del futuro y también afrontar exitosamente la actual crisis alimentaria. Pues los socialistas consideramos que España debería tener un sector agrario y ganadero competitivo en términos de mercado que garantice estratégicamente el abastecimiento, la calidad y la seguridad alimentaria de nuestra población.

La cooperación al desarrollo constituye, sin duda, un instrumento necesario para que los países, las regiones, los colectivos pobres afronten el mayor coste que para ellos siempre tienen todas las situaciones de escasez. Los socialistas lo entendemos así, y por esa razón hemos atribuido a tal cooperación un papel central en la identidad política de nuestra gestión desde el Gobierno. Visto en perspectiva de futuro, e incluso desde el presente, nuestro mundo que puede y debe ser competitivo, tiene que buscar también las fórmulas para ser profundamente cooperativo y solidario.

En apenas cuatro años hemos duplicado nuestra aportación en porcentaje del PIB, y en los próximos cuatro lo situaremos en el 0,7%. Entonces estaremos entre los diez países del mundo que mayor porcentaje destina a ello, y seremos el primer país de entre las grandes economías del mundo en alcanzarlo.

Ahora, ante emergencias concretas proponemos que no solo actúen los países, sino también las organizaciones internacionales, en especial Naciones Unidas, cuya acción seguiremos apoyando financieramente pues el "marco global de acción" diseñado por este organismo incluye todo un conjunto de planes para afrontar la escalada de precios de los alimentos. Seremos asimismo parte impulsora en el seno de la Unión Europea para que ésta asuma un papel cada vez más activo, dado que no podemos ignorar que la inseguridad mundial ahonda sus raíces en el hambre y la pobreza.

Por lo tanto, los socialistas españoles, por un lado, defendemos y promovemos el diálogo político como medio necesario para concertar la seguridad alimentaria del futuro y sortear con éxito ésta u otras crisis. Apoyamos acordar políticas conjuntas en la lucha contra el acaparamiento y la especulación de productos básicos destinados a la alimentación, buscando el equilibrio entre producción agraria con fines alimentarios y la producción agraria con fines energéticos. Por otro lado, rechazamos cualquier tipo de actividad que busque un beneficio económico especulando con el valor financiero de los alimentos. La epidemia de hambre en el mundo deslegitima este tipo de actuaciones.

Sin embargo, para afrontar lo que hemos considerado una crisis estructural no basta con meras acciones de ayuda y cooperación, por muy intensas que éstas sean.

Como ha sido señalado recientemente por diversos paneles intergubernamentales y expertos de diferentes disciplinas, hay un consenso creciente sobre la necesidad de incrementar la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado a la agricultura, para mantener el ciclo hídrico, conseguir un desarrollo sostenible que reduzca el hambre y la pobreza, estimular y dinamizar el medio rural y promover la sostenibilidad ambiental.

En este sentido, la recién aprobada Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural debe ser el punto de partida que marque el camino para que los ciudadanos de nuestro país

pertenecientes al mundo rural dispongan de las mismas oportunidades que los ciudadanos del mundo urbano.

Desarrollo tecnológico, formación, cooperación y compromiso global compartido se convierten en la base para afrontar este reto. La biotecnología, cuyos desarrollos se suceden a una extraordinaria rapidez, marca la frontera del cambio. Un cambio que potencialmente contiene grandes beneficios para la humanidad.

Pero algunos de esos desarrollos son cuestionados socialmente, en tanto que muchos de ellos no llegan más que a los países más avanzados, convirtiendo además en marginales muchas de las formas de producir culturalmente arraigadas de los países pobres, que se esfuerzan en mantenerlas como un componente de su identidad. Por ello necesitamos construir consenso social por medio de las evidencias científicas, los debates sobre las prioridades y los esfuerzos para la equidad.

Es de suma importancia garantizar que la orientación de los avances tecnológicos en el campo de la alimentación aporte beneficios reales a los productores agrícolas y consumidores de las zonas más estériles y empobrecidas del planeta. Para ello es insustituible la acción de los poderes y centros de investigación públicos, dirigidos desde una clara política de solidaridad social e internacional.

A partir de ahí, necesitamos una agricultura y ganadería que trabaje con la naturaleza y no expolie sus recursos de una forma cada vez más insostenible. En este sentido, el Gobierno socialista está realizando inversiones millonarias encaminadas a la modernización de regadíos e infraestructuras hidráulicas, como garantía de las futuras disponibilidades de agua. Este tipo de agricultura debería tener una dimensión global, ofrezca oportunidades a los países pobres e implante reglas justas de comercio. Que combata la pobreza rural y la exclusión urbana. Que atienda, cuando sea conveniente, a las tradiciones culturales y productivas como un elemento ineludible de integración social.

Por esa razón, los socialistas debemos, a través del diálogo con los agentes sociales, incentivar que las prácticas que realicen las empresas públicas y privadas sean respetuosas con el medioambiente.

Hemos obtenido éxitos en las mejoras de la productividad de la agricultura, pero no tanto en la prevención de las injustas o negativas consecuencias sociales y medioambientales asociadas a esos éxitos. No hemos prestado la atención requerida a cuestiones como la pérdida de biodiversidad, o al déficit de provisión de agua. Es hora de poner en marcha políticas que eviten o minimicen estos efectos.

En España estamos sufriendo estos fenómenos y, por tanto, consideramos que el tema del agua exige un gran pacto político, territorial y social, tal y como figura en nuestro programa electoral, pues la gestión del agua es prioritaria en nuestra agenda política, ya que los efectos del cambio climático se verán agravados o minimizados en función de la correcta o incorrecta utilización y gestión del agua, entendida por nosotros como lo que es, un recurso limitado.

Por ello, debemos continuar con la política del agua desarrollada en los últimos cuatro años, para garantizar el consumo, presente y futuro, a la población y aplicar de forma adecuada y eficiente, con solidaridad y consenso, la gestión de los recursos hídricos a través de modernización de conducciones, ahorro de consumo, desalinización, reutilización, modernización de regadíos y aquellas transferencias del recurso, a través de las infraestructuras hidráulicas necesarias, que sean viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas.

Son cada vez más precisas políticas que reduzcan la asimetría de desarrollo en el mundo. Políticas de contención de los subsidios que animan al mantenimiento o la expansión de prácticas insostenibles. Políticas regulatorias más abiertas, que no frenen el acceso libremente competitivo a los mercados de los productores de los países pobres.

Las Administraciones Públicas deben preocuparse de las consecuencias de sus acciones en otras partes del mundo. En este sentido, pueden, en el marco de la legislación vigente, comprar productos fabricados en condiciones aceptables y vendidos a precios justos apoyando a los productores a pequeña escala de los países en vías de desarrollo.

Políticas integrales que incorporen una perspectiva progresista y justa a la necesaria protección de los derechos de propiedad y patentes, de tal manera que faciliten el acceso a semillas y todo tipo de productos implicados en la producción. Para ello, debe buscarse

el apoyo de las organizaciones, empresas y personas que ejerzan la actividad agrícola y ganadera.

Nos comprometemos a cumplir con los compromisos derivados del desarrollo de las disposiciones contenidas en el Tratado TIRFAA (Tratado Internacional de Recursos Filogenéticos para la Agricultura y la Alimentación) ratificado por España en el ámbito de los acuerdos de la FAO en esta materia.

Es necesario repensar, pues, desde esta perspectiva las políticas agrarias y de autoprotección comercial de los grandes países y de las unidades supranacionales, avanzar en las rondas del comercio mundial, y, asimismo, reconsiderar el abandono de producciones que las necesidades de hoy y la presión sobre los precios vuelven a convertir en económicamente rentables. En este sentido, promoveremos la revisión de la política comunitaria, para fomentar una agricultura adaptada a las necesidades actuales en el marco de un comercio justo.

Por otra parte, como hemos podido comprobar reiteradamente en los últimos años, las amenazas a la seguridad alimentaria están creciendo en el mundo. Gripe Aviar, mal de las vacas locas, intoxicaciones, etc. En muchos casos, los riesgos de pandemia de enfermedades infecciosas, entre animales y poblaciones humanas, trascienden las fronteras de la pobreza en las que hasta ahora se hallaban circunscritos. Así vemos como están resurgiendo determinadas enfermedades que se consideraban erradicadas y que hoy vuelven a ser un drama en los países pobres y una amenaza potencial para los países avanzados. Es necesario anticiparse a estas amenazas fomentando políticas que pongan en marcha campañas de concienciación y prevención a nivel internacional.

Se hace cada vez más necesaria la identificación preventiva de riesgos, la transparencia más severa en el uso de productos (pesticidas, metales pesados, hormonas, antibióticos, aditivos, etc.), el estricto control sanitario, el establecimiento de un sistema eficaz y responsable de alertas tempranas de alcance global, el seguimiento inteligente de los procesos de producción, procesamiento, preservación y distribución de los alimentos tanto para consumo humano como animal, comenzando por la exigencia de mayor transparencia e información en el etiquetado de alimentos y productos en general.

Son precisas, igualmente políticas favorecedoras de prácticas saludables y medidas que desincentiven aquellas otras prácticas que son perjudiciales para la salud individual y colectiva. Es imprescindible, por tanto, potenciar y reforzar planes y medidas sobre los hábitos que favorecen una mejor salud para la ciudadanía.

Prevenir enfermedades cuya causa se identifica con tales prácticas, muchas de ellas de orden dietético, y que comportan un enorme coste en términos individuales y sociales, lejos de ser una restricción insoportable a la libertad, constituyen mecanismos de solidaridad colectiva que se enmarcan claramente en los valores progresistas. Desde esa perspectiva progresista son cada vez más imperiosas las políticas de rango mundial que ataquen la desnutrición, las enfermedades crónicas e infecciones en gran parte del planeta y promuevan la disponibilidad efectiva de medicamentos, tecnología y servicios sanitarios.

## **URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD**

La consecución de un urbanismo sostenible es un factor decisivo en la lucha contra el cambio climático. En función del modelo urbanístico que se siga, podrá disminuirse o intensificarse el consumo energético, y como consecuencia, aumentar o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aún cumpliendo la Ley del Suelo, que sin duda significa un gran avance y un punto de partida para revertir un proceso de sobreexplotación del mismo, el Código Técnico de la Edificación y la Certificación Energética de edificios, tendremos muchas dificultades para poder cumplir con Kioto.

Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. La correcta gestión del proceso de urbanización permite reducir los costes de la movilidad, contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las cargas de la prestación de los servicios. Por otra parte, disponer de un entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social, ambiental y económica.

Necesitamos, por tanto, cambiar hábitos en nuestro modelo generalizado de desarrollo insostenible, que ha dado lugar a un territorio muy alterado, de ocupación indiscriminada

y de transformación de suelo artificial. De cara al futuro necesitamos partir de un modelo de ordenación del territorio basado en una cultura de protección y de preservación del suelo y de todos sus componentes (biológicos, hídricos, paisajísticos, etc.) como valioso recurso y patrimonio colectivo limitado. Un modelo que contemple a la movilidad sostenible y el transporte público como elementos prioritarios e imprescindibles.

Necesitamos implantar un urbanismo con análisis preceptivos previos de impactos sobre el territorio, que pueda suponer un freno a los procesos de reclasificación y de sobrecalificación indiscriminada de suelo apto para urbanizar. Un urbanismo que suponga una buena base de ordenación, con una mayor y mejor planificación para su inserción apropiada en la ciudad y en los núcleos rurales, y atención creciente al paisaje, a la movilidad y a la calidad de la forma urbana. Un urbanismo que preste especial atención al gran esfuerzo que realizan muchas administraciones locales contribuyendo solidariamente con las reservas de suelo necesarias para la consolidación y la construcción de infraestructuras supramunicipales dentro de su territorio. Necesitamos una mayor agilidad administrativa y de prestación de servicios que nos comprometemos a impulsar desde el trabajo conjunto de todas las administraciones.

El acceso a la vivienda ha de ocupar un lugar preferente en el planeamiento urbano, tanto en la rehabilitación de cascos urbanos como a través de la construcción de vivienda de protección oficial.

Todo ello no se consigue solo con medidas paliativas sobre el modelo actualmente predominante, condicionado en su mayor parte por los desequilibrios territoriales y la insuficiencia de la financiación municipal. Requiere abandonar en todo el territorio el modelo de ocupación y transformación de suelo artificial, que consume en recursos y contamina en emisiones.

En consecuencia, las políticas activas y las estrategias positivas han de ir, en primer lugar, enfocadas a la producción de "arquitectura de emisión cero", o lo que es lo mismo a promover arquitecturas de energías renovables, de bajo consumo de recursos y que sean "sumideros" de emisiones por sí mismas, o mediante sus entornos, lo que significa un cambio radical en la manera de proyectar los sistemas y sus áreas de influencia. Asimismo, se hacen cada vez más necesarias políticas públicas que faciliten la

adaptación de gran parte de las viviendas existentes a unos parámetros de consumo energéticos sostenibles.

La arquitectura como yacimiento de emisiones y producción de energía renovable es un objetivo ya de esta década, pero no será suficiente si no pensamos en barrios y distritos ecológicos, lo que quiere decir actuaciones integrales de "energías limpias" y "emisión cero" en partes importantes de las ciudades, que ataquen en origen las fuentes de emisión.

Esta posición activa significa proyectar pensando en no emitir, emitir menos o mitigar más. Este desafío hay que ponerlo en la misma raíz del urbanismo público y privado. El diseño inteligente de los territorios no puede basarse en la mera singularidad que añade valor de marca al concepto de lo sostenible. Hay que hacer un esfuerzo complementario para instrumentar políticas de nuevo cuño que establezcan la forma y las metodologías de conocimiento sobre la ordenación urbana en un nuevo contexto cultural y tecnológico.

Una estrategia de urbanismo sostenible no puede olvidar una de las causas del crecimiento desordenado de las ciudades y de la sobrecalificación del suelo: el desarrollo urbano ha sido la principal vía de financiación de los ayuntamientos. Es imprescindible acometer la reforma de la financiación local y promover las buenas prácticas en materia de planeamiento, gestión y disciplina urbanística.

El Código de Buen Gobierno, la transparencia y la contundencia serán nuestra respuesta ante cualquier práctica que se aleje del interés general.

El desafío de cambiar los parámetros de nuestro modelo de ciudad, del modelo territorial por el que apostamos, pasa por hacer ciudades avanzadas, amables y saludables mediante un urbanismo de redes, de capas y multidimensional.

Urbanismo de redes, es decir, un urbanismo que no sea estanco respecto de la necesaria porosidad de los sistemas ambientales, limpieza de emisiones por sinergia de las redes de energía, agua, saneamiento, transporte etc. Un urbanismo de capas que tenga tanto interés en el subsuelo como en la atmósfera y que estructure muchas dimensiones a la vez, teniendo en cuenta la eficacia del contexto, la eficiencia socioeconómica y la

responsabilidad hacia el medio físico. No solo el "lugar" sino las implicaciones del entorno y los límites. Unos límites que deben dejar de ser herméticos, para convertirse en elementos de intercambio dinámico y de flujo de energías desde la arquitectura a la ciudad en un proceso reversible de ida y vuelta que mejore nuestra calidad de vida.

Un urbanismo sostenible para cuyo desarrollo las administraciones públicas impulsarán la normativa adecuada y reconocerán la especial situación de los municipios de pequeño tamaño, no exenta de responsabilidad ante el cambio climático.

La ciudad concebida como un espacio urbano pensado para las personas, con más zonas verdes y parques públicos, basada en el modelo compacto frente a la dispersión continuada, es la meta de un proceso gradual de cambio en los modelos de planificación estratégica, supramunicipal y supraterritorial, para adelantarse a los procesos en lugar de ir a la zaga de sus impactos perversos, como ocurre ahora. Las ciudades sostenibles vendrán de un esfuerzo continuado por proyectar la ciudad sostenible desde dentro de la existente y solo se podrán conseguir con el esfuerzo de la iniciativa pública, lo que va más lejos de crearla sólo con la vivienda social energéticamente eficiente.

Avanzar hacia este modelo de ciudad sostenible y saludable requiere el esfuerzo del trabajo conjunto de todas las Administraciones (Gobierno de España, Comunidades Autónomas y gobiernos de las Entidades Locales).

Desde el Partido Socialista promocionaremos la realización de un debate nacional con participación de todas las administraciones, personas expertas en el campo del urbanismo, la arquitectura, la ingeniería pero también en las ciencias sociales, en seguridad, etc. para repensar la ciudad, los pueblos y los territorios.